

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

EXPEDIENTE 2017-00206

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil diecisiete (2017)

Ingresa al Despacho la DEMANDA instaurada, en ejercicio del proceso EJECUTIVO, por el señor RODRIGUO BUSTAMANTE ILLERA, contra LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL, para el trámite correspondiente, previa referencia de los siguientes,

I. ANTECEDENTES

Con fecha 16 de octubre de 2009, este Despacho dictó sentencia de primera instancia (fls. 29 al 51), en la cual, se accedieron a las pretensiones ordenando a la entidad demandada reliquidar la asignación de retiro del demandante conforme al IPC, sentencia que fue confirmada el 25 de noviembre de 2010 (fls. 14 al 28), lo anterior dentro del proceso identificado con el número 2008-00138.

La actora presenta escrito de solicitud de cumplimiento a la sentencia., porque a su sentir CREMIL, no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia proferida, al cancelar de forma parcial la indexación de la condena impuesta.

II. CONSIDERACIONES.

Para efectos de decidir la solicitud de cumplimiento de sentencia presentada por el señor RODRIGO BUSTAMANTE ILLERA, quien obró como demandante dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 2008-00138, es necesario precisar que en vigencia del Código Contencioso Administrativo anterior (Decreto 01 de 1.984), lo relativo al procedimiento y demás asuntos relacionados con el proceso ejecutivo, como lo es la validez de los documentos que componen el título, se regían por el Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo

168 del C.C.A., remisión que fue mantenida por el legislador al momento de expedir la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de la Contencioso Administrativo), en consideración a que en el título IX del citado código, sólo se reguló lo relativo a: (i) a los actos jurídicos constituyentes del título, (ii) a la prescripción de los títulos ejecutivos, numerales 1º y 2º del artículo 297 y (iii) a la ejecución en materia de contratos y condenas impuestas a entidades públicas (artículo 299), sin que la nueva norma se encargara de crear un procedimiento ejecutivo especial administrativo que de forma autónoma e independiente regule la materia, razón por la cual, en los procesos ejecutivos, debe aplicarse el artículo 306 del estatuto administrativo, que prescribe la remisión a la norma procesal, teniendo presente que la actualmente vigente es la consagrada en el Código General del Proceso; **tal postura fue acogida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 24 de junio de 2013, expediente N° 2012-029, con ponencia del Doctor LEONARDO TORRES CALDERÓN, donde se dijo:**

*“(...) En consecuencia si bien el Acuerdo No. PSAA12-9454 de 23 de mayo de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., se encuentra actualmente conocimiento de los procesos regulados por el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), y que el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., tenga a su cargo “las funciones y competencias derivadas de la implementación del nuevo sistema procesal en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa consagrado en la Ley 1437 de 2011”, **lo cierto es que el trámite del proceso ejecutivo no se encuentra regulado en los mencionados Códigos sino en el Código de Procedimiento Civil (...)**” (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Teniendo en cuenta que en materia de procesos ejecutivos la norma aplicable es el estatuto procesal civil, en estos momentos la Ley 1564 de 2012 – CGP, el Despacho encuentra que el artículo 442 Ibídem contempla:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena

65

proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”(Negrilla del Despacho).

El nuevo estatuto procesal, también trae consigo lo correspondiente al mandamiento ejecutivo de pago, que a voces del artículo 430 consagró:

“ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal...” (Negrilla y subrayas propias).

Sobre la exigencia ordenada en el artículo 430 Ibídem, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo, **HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SECCION TERCERA – SUBSECCION B, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, en sentencia del 24 de abril de 2014. Radicado 07001-23-31-000-2000-00118-01(26621), al revisar el valor probatorio de las copias y, las exigencias para el título ejecutivo consideró:**

“...i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachén de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar –si lo conoce– el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

(...)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es

totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del C.C.A., norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de 2011 –nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

En virtud de lo anterior, no debe olvidarse que el artículo 114 del CGP, señala que las providencias que se pretendan ser utilizadas en un proceso como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria, como se verifica a continuación:

“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:
(...)

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Finalmente el artículo 215 del CPACA, es claro al regular:

“ARTÍCULO 215. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS.

<Inciso derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>

La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan

deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley". (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Las normas transcritas, en especial el artículo 215 del CPACA, despejan todas las dudas sobre el título ejecutivo, el cual, deberá cumplir con los requisitos consagrados en la Ley, **dejando expresamente regulado que los mismos no pueden presentarse en copia simple**, porque de ser así carecería de validez y valor probatorio, como se dejó sentado en la transcripción normativa.

Confirma lo anterior, el artículo 246 del CGP cuando dice: "*las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia*" y como en el caso de los procesos ejecutivos existe norma expresa **que prohíbe su presentación en copia simple**, debe entonces presentarse la misma en original con la constancia de ser primera copia, de prestar mérito ejecutivo, y además, que se encuentra debidamente ejecutoriada. (negrilla fuera de texto).

Se concluye, que la vía judicial para el cumplimiento forzado de las obligaciones impuestas en sentencias condenatorias, proferidas al amparo del Decreto 01 de 1984, es el proceso ejecutivo que se surte con independencia del proceso ordinario, y que en virtud de lo consagrado en el artículo 430 del C.G.P., solo se profiere mandamiento de pago, si la demanda, además de cumplir con los requisitos de Ley, **está acompañada de la sentencia que constituye el título ejecutivo**, con sus respectivas formalidades – ser primera copia – prestar mérito ejecutivo - contener constancia de ejecutoria; presupuesto que no fue cumplido en el asunto bajo estudio, teniendo en cuenta que **la parte actora aportó copia autentica de la sentencia, sin que la misma tenga constancia de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo** pretendiendo que sea esta la que constituya el título ejecutivo, por lo que el Despacho se abstendrá de librar mandamiento ejecutivo de pago.

En estos términos, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

III. RESUELVE:

PRIMERO. NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO, conforme a lo manifestado a lo largo de esta providencia.

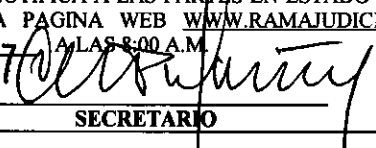
SEGUNDO: En firme este proveído archívense las presentes actuaciones dejando las constancias correspondientes.

TERCERO: Se reconoce y se tiene a la Doctora NELSY YAMILE GARZON RODRIGUEZ, identificada con la C.C. 52.476.105 y T.P. 242.047 del C.S.J, como apoderado judicial de la parte actora en los términos y para los efectos del memorial poder visible a folio 5 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

CATC

<p>JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. SECCION SEGUNDA</p> <p>EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA A LAS PARTES EN ESTADO ELECTRONICO No. <u>23</u>, A TRAVES DE LA PAGINA WEB <u>WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO</u>, HOY <u>17 JUL 2017</u> A LAS <u>8:00 A.M.</u></p> <p> SECRETARIO</p>
